# Gobierno del Estado de Baja California Sur

**Contraloría Social en el Programa Educación para Adultos**

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-03000-16-0601- 2018

601-DS-GF

**Consideraciones para el seguimiento**

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes.

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.

## *Alcance*

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 21 comités de contraloría social del Programa Educación para Adultos, respecto de los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social.

## *Antecedentes*

La participación social es un elemento fundamental en el ejercicio de los recursos públicos, ya que, a partir de ella, la sociedad tiene una tarea primordial en su vigilancia y es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.

Al respecto, las disposiciones normativas en esta materia son diversas y heterogéneas; sin embargo, una de sus vertientes es la de contraloría social, la cual está normada en la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento y es aplicable para los programas federales de desarrollo social.

Dicha normativa establece que la Secretaría de la Función Pública emitirá Lineamientos en esta materia, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por primera

vez en abril de 2008 y una nueva versión en octubre de 2016; estos últimos son aplicables desde el ejercicio 2017.

La estrategia de contraloría social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social.

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido la ASF, desde la fiscalización de la CP 2014, ha realizado auditorías a la gestión de la estrategia de contraloría social por parte de la Secretaría de la Función Pública, como rectora de este proceso, así mismo a la operación de la misma en las dependencias federales y entidades federativas.

## *Resultados*

**NORMATIVA**

1. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, por medio del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, dispuso de un área encargada de operar la estrategia de contraloría social del Programa Educación para Adultos, para lo cual designó un enlace de contraloría social con objeto de atender lo relacionado en esa materia ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Cabe mencionar que en el mes de septiembre mediante oficio se realizó un cambio de enlace ante la Instancia Normativa.
2. Con la revisión del Convenio Específico de Colaboración para operar el Programa de Educación para Adultos suscrito entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, el 17 de febrero de 2017, se verificó que dicho documento incluyó un apartado de contraloría social.
3. El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur dispuso del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) para el Programa Educación para Adultos; el cual consideró todos los elementos establecidos en la Guía Operativa del programa.

# PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

1. Con la revisión de los materiales de difusión utilizados para la estrategia de contraloría social por el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, se verificó que éstos no contemplaron todos los elementos establecidos por la normativa, ya que no incluyeron las medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de los comités de contraloría social.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio informó que el tríptico utilizado para la difusión de la contraloría social menciona que el comité será el encargado de vigilar el Programa de Educación para Adultos, y uno de esos puntos es la equidad de género; sin embargo, con la revisión del tríptico se verificó que no se dispuso de un apartado que promueva que la integración se deberá de realizar de manera equitativa entre hombres y mujeres, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, los materiales de difusión consideren todos los elementos establecidos en la normativa.

1. Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur proporcionó un tríptico como material de difusión a los 21 comités de contraloría social.
2. Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, se constató que el personal de dicha institución recibió capacitación en materia de contraloría social por parte del INEA, la cual se llevó a cabo por medio de una videoconferencia realizada desde las oficinas centrales.
3. Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2017 el personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur capacitó en materia de contraloría social del Programa Educación para Adultos a 43 funcionarios, 16 beneficiarios y 35 integrantes de los comités de contraloría social mediante 21 capacitaciones a los comités de contraloría social; asimismo, se dispuso de una presentación en Power Point como evidencia del material utilizado para la capacitación de los comités de contraloría social, la cual considera los módulos de capacitación establecidos en la estrategia marco.
4. Con la revisión del material utilizado para la capacitación de los comités de contraloría social, se verificó que no se consideró lo referente a la elaboración del escrito libre ni se mostró evidencia de que se les asesoró al respecto; tampoco de que se les proporcionó información sobre la operación del programa ni del ejercicio de sus actividades.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio informó que el llenado del Escrito Libre se llevó a cabo en los casos que se requeriría, según lo descrito en la Guía Operativa del programa; asimismo, presentó el apartado de la Guía Operativa que menciona que la integración de comités se hará como mínimo de dos beneficiarios, y en caso de no cumplir la equidad entre hombres y mujeres se deberá justificar en la constancia firmada; sin embargo, la información presentada no se vincula con la irregularidad, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se asesore a los comités de contraloría social constituidos del Programa Educación para Adultos

respecto de la elaboración del escrito libre; asimismo, para que se les informe sobre la operación del programa y el ejercicio de sus actividades.

1. Con la revisión del Programa Anual de Trabajo firmado entre la Contraloría General de Baja California Sur y la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se verificó que para el ejercicio fiscal 2017 el Órgano Estatal de Control acordó brindar apoyo a las actividades de contraloría social del Programa Educación para Adultos en materia de difusión, capacitación, y recopilación de informes de comité. Al respecto, se validó su cumplimiento conforme a lo siguiente:

Mediante oficio, en febrero de 2017, la Contralora General de Baja California Sur solicitó al Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Gobierno del Estado de Baja California Sur que nombrara a un servidor público como enlace de contraloría social para iniciar las actividades para la planeación del PETCS del Programa Educación para Adultos, el cual fue designado por medio de oficio en ese mismo mes. La aprobación y ratificación del PETCS se realizó el 27 de marzo de 2017; sin embargo, se verificó que no se acordaron las actividades de difusión convenidas en el PATCS con la Secretaría de la Función Pública, por lo que no se presentó evidencia del apoyo en materia de difusión en el programa.

En materia de capacitación, el OEC presentó documentación con la que se acreditó que el 10 de marzo y 31 de octubre de 2017 capacitó al personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos encargado de implementar la estrategia de contraloría social del programa; asimismo, presentó un oficio remitido al Jefe de Departamento de Planeación del INEA mediante el cual le notificaron el avance de la integración de los informes de comités realizados en 2017, así como de las dificultades que se presentaron para no dar cumplimiento a las metas establecidas en la Guía Operativa.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio remitió copia del Informe de Acompañamiento del Órgano Estatal de Contraloría General de Baja California Sur, de las actividades contraloría social en las plazas comunitarias 2017 y los trípticos distribuidos como material de difusión; sin embargo, no se dispuso de la instrucción para que el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social considerara todas las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo, ni los mecanismos a implementar para que se dé cumplimiento a dichas actividades, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se realicen todas las acciones acordadas en materia de contraloría social entre el Órgano Estatal de Control y la Secretaría de la Función Pública, y se disponga de la evidencia correspondiente.

# OPERACIÓN

1. Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, respecto del cumplimiento del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), se verificó que se establecieron 23 actividades, de las cuales 7 correspondieron al apartado de planeación, 7 a promoción y operación y 9 a seguimiento, y con su revisión se determinó lo siguiente:

Actividades fuera del plazo establecido:

* + Capacitar a los comités de contraloría social.

Actividades de las que no se presentó información para validar su cumplimiento:

* + Elaborar calendario de capacitaciones,
	+ Proporcionar asesoría para la elaboración del escrito libre. Actividades en las que no se cumplieron las metas establecidas:
	+ Capturar en el SICS los informes con las respuestas de los integrantes del Comité. Sólo se registraron 25 de los 42 establecidos como meta.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio informó que el calendario de capacitaciones se sujetó a la Planeación de Reuniones, ya que es complicado que la población atendida asista a los puntos de encuentro, ya que es un sistema abierto; sin embargo, no se dispuso de la instrucción para que, en lo subsecuente, se dé cumplimiento de las actividades conforme a los plazos establecidos, ni del mecanismo que se implementara para ello, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se realice el total de actividades dentro de los plazos establecidos en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) y se resguarde la evidencia correspondiente.

1. En el ejercicio 2017, de acuerdo al Anexo Técnico de integración del Convenio de colaboración celebrado entre el INEA y el IEEA, le fueron entregados al Gobierno del Estado de Baja California Sur 6,703.8 miles de pesos del Programa Educación para Adultos, los cuales se ejercieron en 21 plazas comunitarias institucionales según el padrón de beneficiarios presentado.

Para su vigilancia se constituyeron 21 comités de contraloría social; lo cual correspondió con la meta establecida en la Guía Operativa del programa, misma que establece que para llevar a cabo la vigilancia de los servicios que se proporcionan en las plazas comunitarias la Instancia Ejecutora deberá constituir comités de contraloría social en cada una de ellas.

De acuerdo con el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), los 21 comités constituidos vigilaron 1,569 miles de pesos, lo que significa el 23.4 % de los recursos asignados al Programa Educación para Adultos.

Asimismo, se verificó que los 21 comités de contraloría social se constituyeron mediante en una reunión, para la cual se realizó la minuta correspondiente; además, en las actas de constitución se constató que se promovió la integración equitativa entre hombres y mujeres de los comités de contraloría social.

1. Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que se dispuso de las 21 constancias de integración del comité de contraloría social firmadas por sus integrantes, las cuales incluyen el escrito libre para solicitar el registro de cada comité.

Este formato contiene los elementos mínimos establecidos por la normativa, así como los mecanismos e instrumentos que los comités de contraloría social utilizarían para el ejercicio de sus actividades.

1. Con la revisión de las 21 constancias firmadas de integración de los comités de contraloría social que incluyen los escritos libres, se verificó que, de los 33 integrantes establecidos en las constancias de integración de los comités de contraloría social, 27 correspondieron a educandos y 6 no fueron localizados en dicho padrón, por lo que se desconoce si corresponden a beneficiarios del programa.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, remitió los comprobantes de registro de los beneficiarios, con los cuales se constató que los integrantes de los comités de contraloría social fueron beneficiarios del programa, con lo que se solventa lo observado.

1. Con el análisis de la información proporcionada, se verificó que los 21 comités de contraloría social fueron constituidos durante el ejercicio fiscal 2017, por lo que no se presentaron casos en los que algún comité realizara actividades de contraloría social mayor a un ejercicio fiscal.
2. Con el análisis de las constancias firmadas de integración de los comités de contraloría social, se verificó que los 21 comités constituidos proporcionaron evidencia de que realizaron sus actividades de contraloría social conforme a lo siguiente:
* Solicitar la información pública relacionada al programa.
* Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría social.
* Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa
* Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.
* Vigilar que: Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa; el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación; los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos; se cumpla con los períodos de servicios; exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los servicios; el programa federal no se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo; el programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres; las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.
1. Con la revisión de la Guía Operativa del programa se verificó que se debieron realizar dos reuniones con los miembros del comité y los beneficiarios, adicionales a la reunión de constitución del comité de contraloría social, con el fin de promover que se realicen actividades de contraloría social. Para los 21 comités de contraloría social constituidos se debieron realizar 63 reuniones; sin embargo, con el análisis de la documentación proporcionada por el INEA, se constató que sólo se disponía de 45 actas de asamblea, conforme a lo siguiente:
	* 1a. reunión adicional: Sólo se presentó evidencia de las reuniones realizadas por 17 comités.
	* 2a. reunión adicional: Se presentaron 7 reuniones correspondientes al mismo número de comités de contraloría social.

De acuerdo con lo anterior, sólo 7 de los 21 comités de contraloría social constituidos realizaron el total de reuniones adicionales establecidas en la Guía Operativa. Además, se constató que las minutas de reunión fueron rubricadas por algún servidor público, integrante del comité y beneficiarios del programa.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, remitió un oficio mediante el cual informó las dificultades presentadas en el transcurso del año, las cuales imposibilitaron realizar todas las actividades de contraloría social; sin embargo, no se presentó el mecanismo para que, en lo subsecuente, se realicen el total de reuniones establecidas en la normativa con el comité de contraloría social, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se realice el total de reuniones establecidas en la Guía Operativa del Programa con los comités de contraloría social.

1. Con el análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado, se verificó que en 2017 el material de difusión proporcionado a los comités de contraloría social estableció los mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de los comités de contraloría social, para lo cual se consideraron medios de comunicación telefónica, buzón de quejas, redes sociales, correo electrónico y de manera presencial en las oficinas de la instancia normativa, sin embargo, no se dispuso de los mecanismos locales para la atención de quejas y denuncias de la operación del programa.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, remitió copia del tríptico, para la difusión de la contraloría social, que considera los mecanismos locales para la atención de quejas y denuncias, respecto del funcionamiento del programa, con lo que se solventa lo observado.

1. El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur presentó documentación con la cual se validó, que mediante oficio informó al INEA que durante el ejercicio fiscal 2017, no se presentaron quejas y denuncias sobre la operación del programa.

# RESULTADOS

1. Con el análisis a la documentación proporcionada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, se verificó que los comités de contraloría social entregaron 25 informes de los 42 que debieron entregarse; 2 por comité de contraloría social. De acuerdo con la Guía Operativa, las instancias ejecutoras organizarán una reunión para distribuir y recopilar el primer y el segundo informe en junio y noviembre respectivamente.

Asimismo, con la revisión de los informes se verificó lo siguiente:

* Los 25 informes entregados dispusieron de su fecha de elaboración y se corroboró que fueron firmados por al menos un integrante de los comités de contraloría social y de algún servidor público; sin embargo, todos los informes comprendieron un periodo que abarcó de junio a diciembre; al respecto, 8 comités de contraloría social reportaron las actividades realizadas entre dicho periodo de tiempo en dos ocasiones, por lo que no se dispuso del reporte de las acciones de contraloría social realizadas correspondientes al primer informe que debieron efectuar. Adicionalmente, de cuatro comités de contraloría social no se obtuvo evidencia de algún informe realizado, ni se dispuso de ningún informe correspondiente al mes de junio, debido a que los comités de contraloría social se constituyeron durante dicho mes o posteriormente, por lo que no se realizaron actividades en ese periodo.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, remitió un oficio mediante el cual se informó las dificultades presentadas en el transcurso del año, las cuales imposibilitaron realizar todas las actividades de contraloría social; sin embargo, no se dispuso de la instrucción ni del mecanismo para que, en lo subsecuente, los comités de contraloría social realicen el número de informes que deben realizar, conforme a lo establecido en la normativa, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se realice el total de los informes establecidos por la Guía Operativa y éstos se correspondan con el periodo efectivamente vigilado.

1. La entidad fiscalizada presentó evidencia de 25 informes realizados por 17 comités de contraloría social; sin embargo, debido a que 8 comités de contraloría social reportaron dos veces las actividades realizadas en un mismo periodo, sólo 17 de ellos se realizaron de manera adecuada; cabe mencionar que no se reportaron actividades del primer periodo que abarcó del mes de enero a junio.

Con la revisión de los 25 informes del segundo periodo (julio-noviembre) , se determinó lo siguiente:

* El 72.0% de los comités dio a conocer que recibió información referente a los objetivos y beneficios que otorga el programa; el 96.0% de los requisitos para ser beneficiario; el 20.0% del tipo y monto de los apoyos del programa; el 52.0% sobre la conformación y funciones del comité; el 72.0% del proceso para presentar quejar y denuncias; y el 48.0% informó conocer de los requisitos para ser beneficiarios, entre otros.
* Los 17 comités de contraloría social manifestaron que realizaron algunas de las actividades de contraloría social; de éstos, el 60.0% informó que dentro de sus funciones estaba el solicitar información de los apoyos y/o servicios; el 72.0% manifestó conocer que podrían verificar el cumplimiento de los apoyos y vigilar el uso correcto de los recursos del programa; el 28.0% conocía la posibilidad de informar a otros beneficiarios sobre el programa y el 76.0% contestar informes de contraloría social, entre otros.
	+ El 60.0% de los comités de contraloría social que realizaron su informe mencionó que participar en las actividades de contraloría social les sirvió para recibir oportunamente los apoyos y/o servicios; el 64.0% para recibir mejor calidad en los apoyos y o servicios del programa, y el 36.0% para que se atiendan sus quejas, entre otros.
	+ El 100.0% de los comités respondió que el ejecutor del programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, y que se cumplió con lo que se les informó que se les entregaría.
	+ El 100.0% de los comités mencionó que el programa no se utilizó con fines políticos electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo, además de que no se presentaron quejas y denuncias a las autoridades competentes.
	+ El 100.0% de los comités mencionó que las personas beneficiadas cumplen con los requisitos para ser beneficiarios y que, en la elección de los integrantes de los comités, se dio la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres, así como que el programa se aplicó en un marco de igualdad a hombres y mujeres.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el trascurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, remitió un oficio mediante el cual se informó las dificultades presentadas en el transcurso del año, las cuales imposibilitaron realizar todas las actividades de contraloría social; sin embargo, no se dispuso de la instrucción ni el mecanismo para que, en lo subsecuente, los comités de contraloría social realicen los informes correspondientes en los periodos establecidos en la Guía Operativa del programa, por lo que no se solventa lo observado.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efectos de que, en lo subsecuente, los informes realizados sean debidamente requisitados.

1. La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que el comité de contraloría social informó a los beneficiarios sobre los resultados de las actividades de contraloría con base en los informes realizados.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, los comités de contraloría social informen a los beneficiarios del programa sobre los resultados de sus actividades, con base en los informes realizados.

# SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL

1. Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se verificó que la entidad fiscalizada registró en el sistema los 21 comités de contraloría social constituidos; asimismo, se constató el reporte de las 21 capacitaciones impartidas a los beneficiarios e integrantes de los comités en materia de contraloría social y de los 25 informes realizados por los comités de contraloría social.
2. Con la revisión de la información reportada en el SICS, se verificó que el IEEA registró la distribución de 250 trípticos como material de difusión mientras que de material de capacitación, se reportaron 250 guías para beneficiarios y 1 presentación en Power Point. Adicionalmente, se validó que en el sistema se registraron 64 reuniones con los comités de contraloría social, en las que se trataron temas como la constitución de los comités de contraloría social, orientar en el llenado de informes y el recopilar apartados de informes y/o informes completos; no obstante, lo registrado no coincide con la información física presentada.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se registre el total de actividades realizadas en materia de contraloría social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), de acuerdo con la evidencia documental disponible.

# CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

1. Con la revisión de la operación de la estrategia de contraloría social en el Programa Educación para Adultos realizada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, se verificó que se dio cumplimiento parcial a las metas y objetivos conforme a lo siguiente:

Cumplimiento.

* Se dispuso de un enlace de contraloría social encargado de la promoción, la operación y el seguimiento.
* El convenio para la transferencia de recursos consideró un apartado de contraloría social.
* El PETCS consideró los elementos establecidos en la Guía Operativa.
* Los servidores públicos del Gobierno del Estado recibieron capacitación en materia de contraloría social por la instancia normativa.
* Los comités de contraloría social fueron capacitados en materia de contraloría social.
* Se proporcionó evidencia de la entrega de material de difusión a todos los comités de contraloría social constituidos.
* Se constituyeron todos los comités de contraloría social que debieron constituirse, de acuerdo con la meta establecida en el PETCS.

Incumplimiento.

* El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur no realizó el total de actividades establecidas en el PETCS, o existieron inconsistencias en el cumplimiento de las metas y plazos establecidos.
* El material de difusión no consideró los elementos establecidos por la normativa.
* 14 comités de contraloría social no realizaron el total de reuniones estipuladas en la Guía Operativa.
	+ No se realizó el total de informes de comités de contraloría social establecidos en la Guía Operativa y éstos presentaron inconsistencias en su registró.
	+ La información registrada en el SICS no coincidió con la evidencia documental proporcionada.

# Recomendación

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda a efecto de que, en lo subsecuente, se cumplan las metas y objetivos de la contraloría social en el Programa Educación para Adultos.

## *Consecuencias Sociales*

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.

## *Resumen de Observaciones y Acciones*

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 10 Recomendaciones.

## *Dictamen*

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 21 comités de contraloría social del Programa Educación para Adultos, así como a la Contraloría General de de Baja California Sur. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad y orientar las actividades de los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).

El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur conoce las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las siguientes.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur no realizó el total de actividades establecidas en el PETCS, o existieron inconsistencias en el cumplimiento de las metas y plazos establecidos; el material de difusión no consideró los elementos establecidos por la normativa; 14 comités de contraloría social no realizaron el total de reuniones estipuladas en la Guía Operativa; no se realizó el total de informes de comités de contraloría social establecidos en la Guía Operativa, y éstos presentaron inconsistencias en su registro, y la información registrada en el SICS no coincidió con la evidencia documental proporcionada.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos de la contraloría social.

## *Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:*

|  |  |
| --- | --- |
| Director de Área | Director General |
| Lic. Juan Evaristo Castillo Melo | Lic. Jaime Álvarez Hernández |

*Comentarios de la Entidad Fiscalizada*

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número CG/2928/2018 del 16 de agosto de 2018, que se anexa a este informe; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta **no reúne** las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23 y 24 se consideran como no atendidos.



## *Apéndices*

*Áreas Revisadas*

El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur.

*Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas*

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 67. Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, numerales primero, quinto, décimo primero, fracción I y VI, décimo tercero último párrafo, fracción VI, décimo cuarto, décimo quinto incisos e y h, décimo noveno, primer párrafo, fracción IV, vigésimo primero, fracciones IV y V, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto.

*Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones*

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.